

Bogotá, D.C., 26 de junio de 2025

Señores Magistrados

**HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
E.S.D.**

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL  
Accionante: SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y  
CESANTÍAS S.A.  
Accionado: TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA –  
SALA LABORAL

**LEIDY JOHANNA OPAYOME BUITRAGO**, identificada con cédula de ciudadanía N° 52.805.671 de Bogotá y portadora de la tarjeta profesional N° 392.946 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales de **SKANDIA AFP – ACCAI S.A.** identificada con NIT 800.148.514-2 sociedad con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.; haciendo uso del derecho que se confiere en el Artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, la Sentencia C-590 de 2005 y demás jurisprudencia y normas concordantes; me permito promover ante su Despacho **ACCIÓN DE TUTELA**, en contra de la sentencia emitida por el **TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA LABORAL**, toda vez que con la providencia proferida por **LA ACCIONADA** el día 31 de mayo de 2024, se han vulnerado los derechos fundamentales al **DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DERECHO A LA IGUALDAD**, consagrados en la Carta Política de 1991 y en la jurisprudencia constitucional. La presente acción constitucional se presenta en los siguientes términos:

## **I. PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA.**

El procedimiento de la Acción de Tutela está previsto en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y en los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 del año 2000. De igual forma, es competente esta corporación, para conocer de la presente acción constitucional según lo establecido en el artículo 1°, numeral 2 del Decreto 1382 del año 2000.

## **II. HECHOS:**

**PRIMERO:** La señora ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI, instauró proceso ordinario laboral contra SKANDIA AFP – ACCAI S.A. antes Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. y otros; con la finalidad de que se declarará la nulidad e ineficacia de su afiliación

al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y en consecuencia se trasladarán los aportes realizados a lo largo de su vinculación en este régimen a la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES.

**SEGUNDO:** En fecha 20 de marzo de 2024 el Juez de Primera Instancia, resolvió declarar la ineficacia de afiliación de la señora ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI, en ese sentido condenó a SKANDIA AFP – ACCAI S.A. a trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES no solo los recursos depositados en la cuenta de ahorro individual junto con rendimientos, sino que también se le condeno a trasladar las sumas percibidas por concepto de gastos de administración, debidamente indexados y con cargo a los recursos propios de mi representada.

**TERCERO:** Por su parte la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla el 31 de mayo de 2024, no solo confirmó la sentencia de primera instancia sino que también adiciona al numeral segundo de la dicha sentencia condenando a **SKANDIA AFP – ACCAI S.A.** a devolver a **COLPENSIONES** sumas adicionales con sus frutos e intereses, rendimientos, comisiones y aportes al fondo de pensión mínima.

**CUARTO:** Teniendo en cuenta que la sentencia proferida por el Ad Quem, fue adversa y contraria a lo señalado en Sentencia SU-107 de 2024, se interpuso el Recurso Extraordinario de Casación, el cual fue negado a través de providencia de fecha 11 de julio de 2024, parte la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla.

**QUINTO:** Por lo anterior y en aras de agotar los recursos ordinarios y extraordinarios con los que cuenta la Jurisdicción Ordinaria en la especialidad Laboral, se presentó el Recurso de reposición en subsidio de Queja contra la providencia señalada, el cual fue bien denegado por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto de fecha 11 de marzo de 2025.

### III. PRETENSIONES

**PRIMERO: TUTELAR** los derechos fundamentales al **DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y DERECHO A LA IGUALDAD** toda vez que el **TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA LABORAL** en sentencia de fecha 31 de mayo de 2024 desconoció el precedente establecido por la Corte Constitucional a través de la Sentencia SU – 107 de 2024, en cuanto ordenó trasladar los conceptos de cuotas de administración, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el porcentaje del Fondo de Garantía de Pensión Mínima debidamente indexadas y con cargo a los recursos de la administradora.

**SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS** los numerales primero y segundo de la sentencia de fecha 31 de mayo de 2024 proferida por el **TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA LABORAL**, a través del cual confirmó y adicionó a la sentencia

proferida por el Juzgado 4 Laboral del Circuito de Barranquilla, particularmente en lo relacionado con el traslado de los conceptos de cuotas de administración, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el porcentaje del Fondo de Garantía de Pensión Mínima debidamente indexadas y con cargo a los recursos de la administradora, dentro del proceso ordinario laboral con radicado N° 08001310500420230023600.

**TERCERO:** Ordenar al **TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA LABORAL** que, en el término de 48 horas posteriores a la notificación de lo resuelto en la presente acción, se profiera una nueva sentencia dentro del proceso ordinario laboral con radicado N° 08001310500420230023600 (01), teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Sentencia SU – 107 de 2024, principalmente en lo que atañe a revocar la condena impuesta a ésta Sociedad Administradora en cuanto a la devolución de los conceptos de cuotas de administración, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el porcentaje del Fondo de Garantía de Pensión Mínima debidamente indexadas y con cargo a los recursos de la administradora.

#### **IV. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS**

En vista de lo enunciado en acápites anteriores, se han vulnerado los siguientes derechos constitucionales fundamentales: Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia y Derecho a la Igualdad.

Lo anterior sin perjuicio de que el Juez Constitucional encuentre demostrada la violación de otros derechos.

#### **V. FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Se invocan como fundamentos de derecho las siguientes disposiciones:

##### **1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA:**

##### **ARTÍCULO 86.**

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 86, consagra que la acción de tutela es un mecanismo especial, extraordinario y expedito con que cuenta toda persona para reclamar la protección de sus derechos fundamentales. En efecto, dispone:

***“Artículo 86:** Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales*

*fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.*

*La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión (...)."*

En línea con reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la lectura del artículo 86 de la Carta Política, se desprende que la acción de tutela es el mecanismo a que puede acudir cualquier ciudadano, en todo momento y lugar, para solicitar la protección de sus derechos fundamentales.

### **ARTÍCULO 13.**

***“Artículo 13:** Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.*

*El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.*

*El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”*

### **ARTÍCULO 29.**

***“Artículo 29.** El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.*

*Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.*

*En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.*

*Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se*

*alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.*

*Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.*

## ARTÍCULO 229.

*“Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.”*

### 2. JURISPRUDENCIA:

#### 2.1. ACCESO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL:

La Corte Constitucional en Sentencia T – 799 de 2011, Magistrado Ponente Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, indicó que:

*“El derecho fundamental de acceso a la administración de justicia se encuentra consagrado en el artículo 229 de la norma superior en los siguientes términos: Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.*

**Este derecho ha sido entendido como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley.**

*Por medio de su ejercicio se pretende garantizar la prestación jurisdiccional a todos los individuos, a través del uso de los mecanismos de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia constituye un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales, ya que, como ha señalado esta Corporación “no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso”. Por consiguiente, el derecho de acceso a la administración de justicia se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de*

*Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos” (Subrayas y negrillas fuera del texto original).*

## **2.2. DERECHO A LA IGUALDAD EN PERSONAS JURÍDICAS:**

Sobre el amparo al Derecho Fundamental a la Igualdad para personas jurídicas, la Corte Constitucional en Sentencia T – 627 de 2017 Magistrado Ponente Dr. Carlos Bernal Pulido dispuso que:

*“(…) **las personas jurídicas gozan de la titularidad de derechos fundamentales, y en esa medida, se encuentran legitimadas para formular acciones de tutela.** Esta Corte, desde sus inicios, ha defendido la titularidad de los derechos fundamentales de las personas jurídicas y, en tal sentido, en la sentencia T-411 de 1992, por primera vez, se indicó que dichos entes ficticios poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías:*

*i) Indirecta, se presenta cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas.*

*ii) Directa, se presenta cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas.” (Subrayas y negrilla fuera del texto original).*

Además, la Corte establece que el derecho a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política no es exclusivo para personas naturales, señala que “(…) *sin la existencia del derecho a la igualdad, se hace imposible la relación de justicia, y como la persona jurídica debe existir en la realización de un orden social justo, se colige que necesita del derecho a la igualdad”.*

## **2.3. DEBIDO PROCESO EN PERSONAS JURÍDICAS:**

La Honorable Corte Constitucional en Sentencia T – 317 de 2013 Magistrado Ponente Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, señala que:

*“Desde sus primeros pronunciamientos **esta Corporación ha sostenido que las personas jurídicas, aún las de derecho público, están legitimadas para ejercer la acción de tutela debido a que son titulares de derechos constitucionales fundamentales por dos vías,** directamente como titulares de aquellos derechos que por su naturaleza son predicables de estos sujetos de derechos, e indirectamente cuando la*

*vulneración puede afectar los derechos fundamentales de las personas naturales que las integran. El corolario lógico de esta titularidad de derechos fundamentales por parte de las personas jurídicas es la legitimación activa para reclamarlos mediante la acción de tutela. En relación con la representación judicial ha señalado la Corte, que la instauración de una acción de tutela por parte de una persona jurídica debe respetar las reglas de postulación previstas en la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991, de manera que sea impetrada por su representante legal, directamente o a través de apoderado” (Subrayas y negrillas fuera del texto original).*

Además de lo enunciado, la Corte hace énfasis en cuáles son los derechos fundamentales que se deben tutelar a las personas jurídicas, sin entenderse ésta enunciación como una exhaustiva, indica que:

*“La jurisprudencia ha hecho distinción respecto de los derechos fundamentales de los cuales puede ser titular una persona jurídica, señalando que algunos de ellos se refieren exclusivamente a la persona humana y, por tanto, aquellas no estarían legitimadas para recurrir a su amparo. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la prohibición de la desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o al derecho a la intimidad familiar. Tampoco son titulares del derecho a la dignidad humana, ni de los derechos a la intimidad personal y a la honra, los cuales “solamente se reconocen al ser humano, pues son atributos propios de éste, inherentes a su racionalidad, inalienables, imprescriptibles y connaturales con el reconocimiento de su dignidad”. **Bajo ese entendido, se ha dicho que una persona jurídica tiene derecho a la igualdad, a la inviolabilidad de domicilio, petición, debido proceso, libertad de asociación, acceso a la administración de justicia y el derecho al buen nombre, sin que esta enunciación pretenda ser exhaustiva**” (Subrayas y negrillas fuera del texto original).*

## **2.4. PROCEDENCIA DE LA TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES:**

La Corte Constitucional a través de la jurisprudencia ha señalado que la tutela por vía de hecho solo procede si se cumplen condiciones taxativas para su presentación. De esta manera, en Sentencia C – 590 de 2005, Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño, estableció como requisitos para la interposición de esta acción constitucional, los siguientes:

*“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.*



*b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.*

*c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.*

*d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.*

*e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.*

*f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”.*



Además, la Corte establece que para que proceda la acción de tutela contra providencia judicial se debe acreditar, al menos, uno de los siguientes requisitos especiales:

*“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.*

*b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.*

*c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.*

*d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.*

*f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.*

*g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.*

*h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.*

*i. Violación directa de la Constitución”.*

## **VI. CASO CONCRETO**

### **1. CUESTIÓN PREVIA:**

Para el caso en concreto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA –SALA LABORAL en sentencia de fecha 31 de mayo de 2024 adicionó y confirmó el fallo de primera instancia proferido por el JUZGADO 4 LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, en el sentido de condenar a SKANDIA AFP – ACCAI S.A. a la devolución de gastos de administración, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el

porcentaje del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, indexados y con recursos propios, desconociendo así lo señalado por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU – 107 de 2024.

En dicha sentencia, la Corte dispuso que:

*“(…) Así, **tan solo es susceptible de traslado el ahorro de la cuenta individual, los rendimientos y si se ha pagado el valor de un bono pensional, pues no toda la cotización es apta de traslado** toda vez que el aporte se desglosa entre otros, en primas de seguros, gastos de administración, el porcentaje para el fondo de garantía mínima. Incluso, tampoco sería posible devolver los aportes voluntarios realizados por el afiliado mientras estuvo en el RAIS y que implicaron beneficios tributarios a efectos de la declaración de renta, la compra de acciones u otro tipo de inversiones, pues se trata de una serie de situaciones que consolidaron.*

*En suma, **ni las primas de seguros, los gastos de administración, o el porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ya sea de forma individual, combinada o indexada son susceptibles de devolución o traslado al configurar situaciones que se consolidaron en el tiempo y que no se pueden retrotraer por el simple hecho de declarar la ineficacia del traslado pensional**” (Subrayas y negrillas fuera del texto original).*

De esta manera, el precedente constitucional fue omitido por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA LABORAL al condenar a esta Sociedad Administradora a la devolución de gastos de administración, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el porcentaje del Fondo de Garantía de Pensión Mínima indexados y con recursos propios, generando así un perjuicio económico en contra de mi representada, pues se le está obligando a devolver unas sumas que fueron descontadas en virtud de lo establecido en la norma (Artículo 20 de la Ley 100 de 1993) y por el buen manejo de los recursos contenidos en la cuenta de ahorro individual de la señora ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI, situación que se consolidó en el tiempo y la cual no se puede retrotraer.

## **2. REQUISITOS GENERALES DE PROCEBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL:**

Ahora bien, en cumplimiento a los requisitos generales para la interposición de la presente acción constitucional contra la providencia judicial proferida por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA LABORAL se debe manifestar:

Requisito Exigido	Cumplimiento en el Caso en Concreto
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.	La presente acción de tutela es de relevancia constitucional, toda vez que, en el caso

	<p>concreto, la actuación judicial del TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA LABORAL desconoce un precedente establecido por la corporación de cierre de la Jurisdicción Constitucional, sin que se esgriman argumentos poderosos para apartarse del mismo, violenta los derechos fundamentales, al debido proceso, la igualdad, al acceso a la administración de justicia y demás derechos constitucionales concordantes, lo cual genera la necesidad de que el Juez Constitucional intervenga, con el fin de hacer valer la seguridad jurídica, social y política de lo establecido en la Constitución del año 1991.</p>
<p><i>Que se hayan agotado todos los medios - ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada.</i></p>	<p>Se cumple con el requisito, ya que, previa a la presentación de esta acción constitucional, se radicó escrito de Contestación a la Demanda, contra el fallo de Primera Instancia proferido por el JUZGADO 4 LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA de fecha 20 de marzo de 2024 se presentó el Recurso de Apelación y, finalmente, en contra de la sentencia proferida en fecha 31 de mayo de 2024 por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA LABORAL, se presentó escrito el cual contenía el recurso extraordinario de casación, mismo que fue negado por no tener interés económico para recurrir.</p>
<p><i>Que se cumpla el requisito de la inmediatez.</i></p>	<p>El auto que declaro bien denegado el Recurso de Casación es de fecha 11 de marzo de 2025, por ende, se cumple con el presente requisito, dentro de los criterios de razonabilidad y proporcionalidad de éste, pues entre la ejecutoria de las providencias y la interposición de la presente acción no han transcurrido más de 180 días.</p>
<p><i>Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.</i></p>	<p>En el caso concreto, el <b>TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA LABORAL</b>, desconoció el precedente jurisprudencial establecido por el órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional dentro de la</p>

	<p>sentencia SU – 107 de 2024, violando lo enunciado por la jurisprudencia constitucional en cuanto al derecho a la igualdad, generando un perjuicio económico, desconociendo que hay situaciones que se consolidaron en el tiempo (descuento por concepto de gastos de administración, primas de los seguros previsional y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima) y que no se pueden retrotraer, por el simple hecho de declarar la ineficacia del traslado de la afiliación de la actora.</p> <p>En lo que respecta al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se debe señalar que, el <b>TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA LABORAL</b>, al desconocer el precedente establecido por la Corte Constitucional a través de la Sentencia de Unificación SU – 107 de 2024, vulneró los derechos fundamentales enunciados, pues no realizó un estudio efectivo respecto de los medios de prueba arrimados a lo largo del proceso, ni hizo uso de sus facultades oficiosas para indagar si se contaba con soportes adicionales de la información brindada al actor, transgrediendo los derechos fundamentales antes enunciados.</p>
<p><i>Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.</i></p>	<p>Se identifican los hechos que generan una vulneración, mismos que fueron cuestionados dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora <b>ESMERALDA ARBOLEDA YUSTI</b> en primera medida, a través de la contestación de la demanda, escrito en el cual se indicó acerca de la imposibilidad de devolver gastos de administración (entendiéndolos como la comisión de administración, las primas de los seguros previsional y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima).</p> <p>De igual forma, junto con el escrito de contestación, se arrimó al proceso el llamamiento en garantía a la aseguradora, con el fin de obtener el pago por concepto de primas de los seguros previsionales; sin embargo y a pesar de haber utilizado diversos</p>

	<p>medios de defensa y para demostrarle al Juez de Primera Instancia que no se debía condenar a SKANDIA AFP – ACCAI S.A. a la devolución de la comisión de administración, las primas de los seguros previsionales y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, no se pronunció sobre esto y condenó a ésta Administradora a la devolución de los conceptos antes enunciados indexados y con cargo a los recursos de la Administradora.</p> <p>Considerando lo anterior, esta Sociedad Administradora interpuso el Recurso de Apelación contra la sentencia proferida por el Juez de Primera Instancia.</p> <p>En cuanto al trámite surtido en Segunda Instancia, se tiene que el <b>TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA LABORAL</b>, se apartó el precedente establecido en la Sentencia SU – 107 de 2024, confirmando la condena impuesta en Primera Instancia, por lo que éste Sociedad Administradora interpuso el Recurso Extraordinario de Casación, mismo que fue negado, por lo que en aras de agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios, presento el Recurso de Reposición y en subsidio el de Queja contra la providencia que negó el recurso de Casación, último que se despachó desfavorablemente para los intereses de ésta accionante.</p>
<i>Que no se trate de sentencias de tutela.</i>	<p>La presente acción constitucional no se trata de una sentencia de tutela. El caso versa sobre la sentencia de Segunda Instancia proferida en un proceso ordinario laboral.</p>

### **3. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL EN MATERIA CONSTITUCIONAL COMO CAUSAL ESPECÍFICA DE LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES:**

Luego de haber estudiado los requisitos generales de la procedencia de la Acción de Tutela contra Providencias Judiciales, debe concretarse una de las especificidades establecidas por la Jurisprudencia en materia de la procedencia de la acción constitucional antes enunciada. En

virtud de lo anterior, se evidenció un desconocimiento del precedente por parte del TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA LABORAL.

De acuerdo con lo anterior, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T – 441 de 2018, Magistrado Ponente Dra. Diana Fajardo Rivera, definió el precedente judicial *como “(...) la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”* (Subrayado y negrilla fuera de texto).

En igual sentido, la Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU – 133 de 2018 Magistrado Ponente Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez, indicó que:

*“La jurisprudencia constitucional ha diferenciado, según su origen, dos clases de precedente: el horizontal y el vertical. Respecto al primero, se ha dicho que comprende “aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial”; mientras que el segundo, “se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional. Así, para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales es determinado por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. En los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores”* (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Para el caso en concreto esto es:

- i) **Precedente horizontal:** Fue establecido por la Honorable Corte Suprema de Justicia en diversas sentencias que atañen a los casos de declaratoria de Nulidad/Ineficacia de la afiliación del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en las cuales se indicó que son objeto de devolución todas las sumas contenidas en la Cuenta de Ahorro Individual de los demandantes, entendiéndose éstas sumas como cotizaciones, rendimientos, intereses, bonos pensionales de haberse redimido, gastos de administración, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el porcentaje del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, estos tres últimos, señalando su devolución con cargo a los recursos de la Administradora e indexados (combinados o individuales puede darse la condena).
- ii) **Precedente vertical:** Fue establecido por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU – 107 de 2024, a través del cual señaló que solo es susceptible de traslado el ahorro contenido en la Cuenta Individual del demandante junto con los rendimientos y el bono pensional de haberse pagado, pues no todo lo cotizado es susceptible de devolución, toda vez que el aporte se desglosa en la comisión de



administración, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje para el Fondo de la Garantía de Pensión Mínima, pues se trata de una serie de situaciones que se consolidaron en el tiempo y no pueden retrotraerse por el simple hecho de haberse declarado la nulidad/ineficacia del traslado del actor del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

De esta manera, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU – 380 de 2021, Magistrado Ponente Dra. Diana Fajardo Rivera, estableció que:

**“El desconocimiento del precedente constitucional puede originarse en razón de la inaplicación de las decisiones emitidas por esta Corporación en el marco del control abstracto de constitucionalidad o concreto de revisión de tutelas. Dichos fallos hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante, tanto en su parte resolutive (erga omnes tratándose de los fallos de control de constitucionalidad e inter partes para los fallos de tutela) y, en ambos casos, las consideraciones de la ratio decidendi son obligatorias para todas las autoridades públicas “en razón de la jerarquía del sistema de fuentes formales de derecho y el principio de supremacía constitucional, que obligan a la aplicación preferente de las disposiciones de la Carta Política y, en consecuencia, de los contenidos normativos identificados por la jurisprudencia constitucional, en ejercicio de su labor de intérprete autorizado del Texto Superior”** (Subrayado y negrilla fuera de texto).

Así mismo, en la Sentencia de Unificación SU – 069 de 2018 Magistrado Ponente Dr. José Fernando Reyes Cuartas, dispuso que:

**“El precedente de la Corte Constitucional, por ser la autoridad encargada de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, debe acatarse por los funcionarios judiciales **con prevalencia** al fijado por las demás autoridades judiciales. **De no ser así, se incurre en causal autónoma de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales**”** (Subrayado y negrilla fuera de texto).

De esta manera, para el caso en materia, se evidencia un desconocimiento del precedente constitucional, pues el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA LABORAL al condenar a esta Sociedad Administradora a la devolución de gastos de administración, primas de los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el porcentaje del Fondo de Garantía de Pensión Mínima indexados y con recursos propios hizo caso omiso a lo resuelto por la Honorable Corte Constitucional en Sentencia de Unificación SU - 107 de 2024, como se ha evidenciado a lo largo del presente escrito, haciendo claridad entonces en que procede la acción constitucional contra la providencia judicial de fecha 31 de mayo de 2024.

Por su parte, el Consejo de Estado en Sentencia con radicado N° 11001031500020160038000 del 11 de mayo de 2016, Consejero Ponente Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expuso los elementos imprescindibles para establecer el desconocimiento del precedente, estos son:



*“(i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (precedente vinculante); (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante), (iv) y que el juez de instancia no presentó una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para separarse del precedente)”.*

Para el caso en concreto se debe enunciar que el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA LABORAL en sentencia de fecha 31 de mayo de 2024, se apartó del precedente constitucional establecido en la Sentencia de Unificación SU – 107 de 2024, sin indicar una justificación razonable para apartarse de lo establecido por la Honorable Corte Constitucional.

## **VII. JURAMENTO**

En cumplimiento al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he presentado ninguna otra tutela por los mismos hechos.

## **VIII. MEDIOS DE PRUEBA**

1. Sentencia de fecha del 20 marzo de 2023 proferido en primera instancia por el JUZGADO 4 LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA.
2. Sentencia de fecha del 31 de mayo de 2024 proferido en segunda instancia por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA – SALA LABORAL.
3. Escrito y Soporte de Radicado del Recurso de Casación
4. Auto de fecha 11 de julio de 2024 a través del cual el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA niega el recurso de casación.
5. Escrito y Soporte de Radicado del Recurso de Reposición en Subsidio de Queja.
6. Auto de fecha 6 de noviembre de 2024 a través del cual el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA Niega el recurso de Reposición, pero concede el de Queja.

7. Auto de fecha 11 de marzo de 2025 a través del cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia declara Bien Denegado el recurso de Casación.
8. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.
9. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la suscrita.
10. Fotocopia de la tarjeta profesional de la suscrita.

## IX. ANEXOS

Téngase como anexos los referidos en el acápite de medios de prueba.

## X. NOTIFICACIONES

**SKANDIA AFP – ACCAI S.A. S.A.** recibirá notificaciones en la Avenida 19 No. 109 A – 30 de la ciudad de Bogotá, Email [cliente@skandia.com.co](mailto:cliente@skandia.com.co) y [lopayome@skandia.com.co](mailto:lopayome@skandia.com.co).

**TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA** recibirá notificaciones en el correo electrónico, Email [seclabbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:seclabbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co).

Del Señor Juez, respetuosamente,



**LEIDY JOHANNA OPAYOME BUITRAGO**

Representante Legal Suplente para Asuntos Judiciales

C.C. 52.805.671 de Bogotá

T.P. 392.946 del C.S.J.